

Alberto Aziz Nassif

Chihuahua: historia de una alternativa

Prólogo
Lorenzo Meyer



laJornada



EDICIONES

Prólogo

Cuando la democracia política llegue a México, si es que llega, bien podría no ser como resultado de una transformación macropolítica, similar a la que ocurrió hace años en Portugal, España o en América del Sur, sino como resultado de transformaciones parciales. En efecto, el cambio histórico del autoritarismo a la democracia en nuestro país, podría ser la conclusión de una larga, penosa y contradictoria marcha de las fuerzas antiautoritarias que se echaron a andar en 1968, y que desde entonces no han parado. Poco a poco, con lentitud desmoralizante y tras fracasos incontables, la presión democrática ha logrado la rendición de algunas ciudadelas de la periferia, pero el gran centro autoritario —la presidencia— está lejos de mostrar signos de estar dispuesto a capitular. Chihuahua es justamente una de esas ciudadelas arrancadas recientemente al monopolio histórico del partido del Estado, y este libro contiene la historia de esa victoria, parcial pero significativa, de la democracia sobre el autoritarismo.

La buena ciencia social requiere, por lo menos, de dos componentes insustituibles e igualmente importantes. En primer lugar, necesita de una preparación teórica profesional y de datos sólidamente cimentados en la realidad. Esta es la parte estrictamente científica, pero por sí misma no es suficiente, pues necesita combinarse con otro componente de naturaleza distinta, moral. Se trata de la pasión del investigador por su tema o, más bien, del compromiso del científico social con los principios y valores éticos que están en juego en todo estudio y juicio del fenómeno social.

No ha existido ni existe la ciencia social neutra, pura y totalmente objetiva. Al elegir el investigador un tema para su análisis y reflexión, y dedicarle una parte de su energía vital, ese investigador, a querer que no, consciente o inconscientemente, toma partido. Ahora bien, esa toma de partido no tiene necesariamente que significar una pérdida de objetividad: el profesionalismo del científico social puede y debe hacer compatible la máxima objetividad que la disciplina permite en cada época, con la defensa de valores éticos. El trabajo de Alberto Aziz Nassif que el lector tiene ahora en sus manos, es una buena muestra de que es posible, aunque no sin dificultad, llegar a hacer compatible el compromiso político y moral con el profesionalismo académico.

Por diez años, el autor de *Chihuahua: historia de una alternativa*, ha seguido paso a paso el desarrollo del proceso político-electoral en ese enorme estado norteño. El resultado de este seguimiento se encuentra ya en numerosos artículos de diarios y revistas y en varios capítulos de libros. En esta ocasión, Alberto Aziz da un paso más en su examen del caso Chihuahua y nos ofrece un libro que reúne los datos indispensables para sustentar una interpretación general sobre el origen, desarrollo y resultado de la enconada lucha electoral que se libró en ese estado entre 1983 y 1992.

El punto de partida del estudio de Alberto Aziz es la decisión de no hacer de eso que llamamos las peculiaridades históricas de ese estado norteño, la base central de su explicación. Desde luego que Chihuahua ofrece amplio campo para explotar lo peculiar, lo casi único: gran extensión, una sociedad que se forjó en el siglo pasado en la guerra contra los indios bravos, la vecindad con Estados Unidos, la tradición de independencia frente al poder central de pueblos como el de Tomochic (1889), el villismo, la experiencia guerrillera post-revolucionaria de la Liga 23 de septiembre o el predominio de la sociedad urbana sobre la rural (67 por ciento urbana) y otras cosas más. Sin embargo, Alberto Aziz prefirió adentrarse en el tema por otro camino: el de la explicación basada en

factores más generales, de esos que pueden encontrarse o desarrollarse en el resto del país; es por ello que la experiencia de Chihuahua que se presenta en estas páginas, encierra lecciones que van más allá del microuniverso chihuahuense y que son de interés para los mexicanos en su conjunto.

En 1983, el PAN arrebató al dominio del partido del Estado, el PRI, once municipios —la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y otros nueve más (aunque finalmente en unos de éstos se anularon las elecciones y en otros se falló en favor del PRI)— y empezó a gobernar al grueso de la sociedad chihuahuense. La victoria de la oposición en Chihuahua tomó por sorpresa al gobierno de Miguel de la Madrid —la sorpresa fue un factor decisivo en la victoria del PAN en ese año— entonces más preocupado por establecer su control sobre las grandes variables económicas del sistema, afectadas por la gran crisis que había estallado el año anterior, que por vigilar las elecciones locales. Esa crisis económica, como es ya sabido, era la etapa terminal de todo un modelo de desarrollo económico adoptado por México y otros países de la región desde la II Guerra Mundial —la industrialización basada en el pequeño y protegido mercado nacional— y tuvo repercusiones negativas e inmediatas sobre una gran parte de la población de las zonas fronterizas, lo cual se tradujo en un estado de ánimo antigubernamental muy generalizado.

A estas alturas es claro que las crisis económicas, por sí mismas, no explican nunca la insurgencia —ni la violenta ni la de las urnas— contra sistemas autoritarios, pero unidas a otros factores, bien pueden transformarse en un elemento catalizador importante, pues toda crisis económica tiende a ser percibida como una agresión de la autoridad contra la sociedad. El otro elemento que se mezcló con la crisis económica entonces, y que también ayuda a explicar lo ocurrido en Chihuahua, fue la fractura que sufrió la élite del poder al finalizar el gobierno de José López Portillo. En efecto, la élite económica mexicana en su conjunto resintió mucho el intento de la clase política en general y del presidente en particular,

por hacer que recayera en los hombros de la banca privada la responsabilidad de una crisis cuyas raíces eran estructurales y no coyunturales. Como se recordará, en 1982 el presidente echó públicamente en cara a los banqueros el “saqueo” al que habían sometido al país propiciando la fuga masiva de capitales. El castigo por el supuesto daño al interés nacional tal y como fue definido desde la presidencia, fue la nacionalización de la banca privada. Esa dramática decisión presidencial, afectó en sus partes vitales a uno de los más grandes capitales del país: al Grupo Chihuahua, encabezado por Eloy Vallina y el Banco Comercial Mexicano (Comermex). El agravio del gobierno a la élite económica de Chihuahua y a la economía fronteriza en general, fue asumido como propio por otra élite: la eclesiástica, que se movilizó políticamente y desempeñó un papel muy importante en crear un estado de ánimo propicio a la insurrección electoral. Este ambiente de crisis económica y política fue el caldo de cultivo para un sentimiento generalizado que vio en el PAN la opción política a un *status quo* deslegitimado.

La victoria municipal panista de 1983 fue el resultado de un enfrentamiento bipartidista, pues la tercera fuerza, la izquierda, no contó en el panorama chihuahuense entonces ni después. Frente a una oposición de centro derecha, el gobierno se vio desafiado en su propio campo y con sus propios argumentos. Y en esta lucha bipartidista entre el partido del Estado por un lado y el PAN y las élites locales por el otro, la oposición panista pudo contrarrestar su falta relativa de recursos materiales con una campaña que buscó activamente el contacto directo con el elector. Al momento de la votación, el PAN pudo montar un aparato de vigilancia del proceso electoral a nivel de casilla, muy eficaz.

De acuerdo con el autor, las administraciones municipales panistas que llegaron al poder en 1983, tuvieron, en general, un buen desempeño, y de esta manera estuvieron a la altura de las expectativas de los votantes e influyeron en el desarrollo posterior de los eventos. Y fue así como Chihuahua arribó al

segundo momento crítico del decenio que aquí se analiza: las elecciones para gobernador de 1986, en donde ya no existió el factor sorpresa, y donde el PRI, apoyado por toda la fuerza del aparato gubernamental local y federal, impuso a su candidato —Fernando Baeza— en unos comicios reñidos pero sin credibilidad en sus resultados.

Ese año de 1986 es calificado por el autor como aquel en el que el PRI logró imponerse y derrotar a una sociedad civil chihuahuense que ya se había vuelto francamente antipriista. El fraude que se llevó a cabo ese año en Chihuahua —y que Juan Molinar logró documentar mostrando la incongruencia entre las cifras demográficas y las de la votación¹—, fue sólo uno de los varios que llevó a cabo en el país el gobierno de Miguel de la Madrid, que para entonces se encontraba decidido a no permitir la coincidencia del cambio que estaba intentando en el modelo económico —sustituir el populismo petrolero con la austeridad del neoliberalismo— con otro en el político y fuera de su control. La campaña de 1986 fue enconada, y Alberto Aziz la define como una de personalidades más que de programas, pues la plataforma del candidato del PRI —Baeza— no resultó ser muy distinta, en su esencia, de la del candidato panista —Francisco Barrio. En realidad, en esa ocasión el priismo decidió “empanizarse” abiertamente como la mejor manera de neutralizar al PAN y fracasó.

El acercamiento del programa del PRI al del PAN y la superioridad abrumadora de recursos del partido del Estado, no bastaron para asegurar la victoria de Baeza: fue necesario un fraude advertido por muchos, pero que se intentó justificar como “patriótico”, pues los voceros oficiales y oficiosos presentaron el posible triunfo panista como un problema para la seguridad del Estado y la soberanía nacional! En efecto, se argumentó entonces que la cercanía ideológica del PAN con el gobierno norteamericano en un estado fronterizo, resultaba un peligro para el proyecto nacional mexicano en su conjunto.

¹ Molinar, Juan. “Regreso a Chihuahua”, *Nexos*, mzo. de 1987, No.111.

El fraude en Chihuahua en 1986 se llevó a cabo básica, pero no exclusivamente, mediante la manipulación del padrón. Se sobreempadronó sin recato, pues mientras el crecimiento demográfico de Chihuahua en los tres años anteriores a las elecciones fue de únicamente 0.92 por ciento, resulta que el crecimiento del padrón fue de ¡7.30 por ciento!: el resultado fueron 93 mil ectoplasmas que votaron disciplinadamente por el PRI. El arcoiris del fraude, nos dice Aziz, se desplegó completamente sobre Chihuahua e incluyó relleno de urnas, expulsión de representantes de la oposición en las casillas, falsificación de representantes, votación bajo presión, cambio sorpresivo de la ubicación de las casillas, supresión de otras, etcétera. Y coronando toda la operación, la toma militar de Chihuahua por 25 mil soldados para disuadir a los posibles protestantes.

La lucha postelectoral, el ayuno de dirigentes, un paro empresarial, la condena pública de los resultados por obispos e intelectuales y otras acciones en el mismo sentido, no hicieron cambiar la determinación del madridista de recuperar Chihuahua, y el triunfo oficial del PRI (57 por ciento) se sostuvo contra viento y marea, echando para ello mano de todos los recursos de que dispone el gobierno, y que son muchos.

Un par de años después tuvieron lugar las elecciones presidenciales de 1988. Este proceso se desarrolló en Chihuahua de manera distinta al contexto nacional. El PAN volvió a perder, pero obtuvo en ese estado una de sus mejores votaciones (38.1 por ciento). Mientras en el país en su conjunto la oposición cardenista se convirtió en la abanderada de la insurgencia electoral, en Chihuahua no fue el caso, pues ahí el cardenismo simplemente no existió, ya que el terreno ideológico le resultó infértil. Cuando en 1989 el calendario electoral volvió a marcar un nuevo encuentro de los chihuahuenses con las urnas para renovar las presidencias municipales, los ciudadanos, desmoralizados, simplemente ya no acudieron al encuentro. La abstención fue entonces del

orden del 70 por ciento y en esas condiciones no le fue difícil al PRI obtener el 60.3 por ciento de los pocos sufragios que se depositaron en las urnas. Esa vez la explicación del triunfo no estuvo tanto en el fraude, sino en una actitud generalizada de rechazo de la sociedad chihuahuense a los procedimientos: se trató de lo que nuestro autor llamó "la fatiga electoral". Con una sociedad enconchada, las elecciones perdieron el carácter competitivo que habían tenido en 1983 y 1986. Aparentemente el PRI-sistema había derrotado definitivamente a la insurgencia electoral de Chihuahua. Sin embargo, no fue ese el caso.

Contra lo previsto por muchos observadores, en la siguiente ronda de elecciones locales, la de 1992, el electorado de Chihuahua sacudió su apatía, volvió a tomar por sorpresa al sistema, y logró, por fin, imponer la transición democrática: el PAN, con Francisco Barrio a la cabeza, arrancó al PRI la segunda gubernatura en toda su historia (la de Baja California en 1989 fue la primera). Para Alberto Aziz, lo más significativo de la elección de 1992 no fue tanto que la confrontación PRI-PAN resurgiera, sino los términos en que resurgió, muy distintos a los del pasado inmediato. En efecto, en esta ocasión los contendientes abandonaron el carácter emotivo de sus campañas —la lucha entre el bien y el mal— para situarlas en términos modernos, es decir, en un tono racional, pragmático, propio de adversarios políticos y no de enemigos irreconciliables.

Es muy probable que la razón del cambio anterior se haya debido más a un factor externo que interno, a algo que en realidad tenía poco que ver con Chihuahua misma y mucho con la circunstancia nacional. Para 1992, en el conjunto del sistema político, el conflicto principal entre el PRI y la oposición ya no pasaba por el PAN: para el gobierno y su partido, el enemigo a derrotar eran Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD, y para lograrlo le fue necesario impedir una posible alianza entre PRD y PAN que se había empezado a dibujar al calor de la disputa por la presidencia en 1988. Aislar al PRD a partir de 1989 requirió, por parte del gobierno, dar al PAN el trato de una

oposición leal y no de amenaza a la seguridad nacional, como había sido el caso en 1986, y así fue. Los dirigentes de Acción Nacional, por su parte, mantuvieron su exigencia de abrir el sistema político a la democracia, pero finalmente negaron su apoyo al PRD cuando éste se declaró víctima del fraude electoral en elecciones locales.

En un ambiente de redefinición del proyecto nacional en su conjunto —la reforma del Estado, siguiendo la línea de la ideología neoliberal— el PAN encontró que el PRI había mudado sus posiciones hacia la derecha y, por tanto, ya no tuvo problema en suscribir partes sustantivas del proyecto gubernamental. Un indicador del grado de identificación entre las posiciones del PAN y el programa de gobierno de Carlos Salinas fue el apoyo que la bancada panista dio, en el Congreso federal, a las iniciativas gubernamentales de reforma política (marco legal de las elecciones de 1991) y bancaria, mismas que el PRD rechazó.

En 1992, el argumento de que una victoria panista en un estado fronterizo ponía en peligro a la seguridad nacional simplemente desapareció. Para ese momento ya había entrado en su etapa final la negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) que, en la práctica y dadas las asimetrías entre las economías de los dos países, equivalía a una integración económica de México con Estados Unidos. En estas condiciones resultaba imposible cualquier justificación gubernamental para una repetición del “fraude patriótico” de 1986. Finalmente, unas elecciones tan sucias como las de seis años atrás, hubieran dado elementos a los enemigos del TLC en Estados Unidos para sustanciar una de sus críticas al Tratado: que México no es una democracia auténtica y Estados Unidos no le podía dar un trato semejante al que dispensaba a Canadá.

El cambio en la naturaleza de la relación PAN-gobierno, no significó, de ninguna manera, que la victoria panista de 1992 fuera fácil. Los recursos del PRI fueron los propios de un partido de Estado; la lucha en este campo fue tan desigual como las

anteriores: el PAN debió remontar este enorme obstáculo —la pobreza relativa de su presupuesto— con inteligencia, un candidato popular —Barrio, de nuevo— y con organización. La sociedad chihuahuense respondió al llamado panista. Esta vez, el poder central —la presidencia— calculó que sus pérdidas serían menores si aceptaba la victoria de sus opositores leales que si intentaba un nuevo “triumfo” al estilo 1986 y la solución democrática se impuso.

Chihuahua encierra un puñado de lecciones para las fuerzas democráticas —la organización de buenas campañas con recursos escasos, la selección de temas y candidatos que despierten la imaginación del elector y la importancia de la vigilancia del proceso electoral a todos los niveles, la neutralización del control gubernamental de los medios con campañas personales—, pero no todas son aplicables a nivel nacional y en particular una: la concentración de fuerzas que le puede dar a la oposición una situación bipartidista. En efecto, un bipartidismo al estilo Chihuahua es imposible en el gran escenario macropolítico donde hay tres grandes fuerzas, no dos, y donde la alianza entre las oposiciones para derrotar al sistema autoritario pareciera, por el momento, imposible.

Estudios como éste que aquí nos presenta Alberto Aziz sobre Chihuahua, son piezas indispensables, insustituibles, para llevar adelante, con inteligencia y no sólo con pasión, la tarea política histórica de la sociedad mexicana en este fin de siglo, y que no es otra que intentar la construcción de un sistema político democrático, pues hasta no lograrlo, los mexicanos como conjunto no habremos abandonado nuestra condición de súbditos para acceder al de ciudadanos.

Lorenzo Meyer.